

Presentación: la hora de resistir

Al término de la presentación de mi anterior libro, *Al Qaeda: raíces y metas del terror global*, la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, Ángeles Domínguez me confesó con una mezcla de emoción y sinceridad que le reconfortaba escuchar cada mañana cómo informábamos en la *Cadena COPE* sobre la amenaza tan seria que representaba toda forma de violencia política para la sociedad española, tanto la de raíz etarra como yihadista, y cómo informábamos sobre los medios y las fórmulas legítimas e ilegítimas para acabar con las organizaciones terroristas.

Durante el transcurso de la presentación, el senador Ignacio Cosidó señaló que aquel libro que se publicaba en mayo de 2006 debía ser leído por el presidente del gobierno por dos motivos. El primero, para cambiar su visión sobre la amenaza que representaba el terrorismo para las sociedades abiertas. El segundo, para redefinir las herramientas y las estrategias necesarias para destruir a los enemigos de la libertad. Es más, señaló que no tardaría demasiado en remitir aquel libro al Palacio de La Moncloa a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero dudando hasta el extremo, eso sí, de que el jefe del ejecutivo tuviese en consideración las recomendaciones de quien siempre ha defendido y defenderá que la relajación, la inacción, la corrección política y el apaciguamiento conforman la receta perfecta para el fracaso en el combate de los terroristas.

Cada una de las líneas de análisis aquí desarrolladas y cada una de las entrevistas aquí recopiladas ofrecen al lector esa doble dimensión: la referencia permanente de las víctimas del te-

¿RENDIRSE ANTE ETA?: 25 VOCES POR LA RESISTENCIA

rorismo y la denuncia reflexiva y combativa de toda forma de negociación política para llegar a la extinción de la violencia etarra. Ésos han sido precisamente dos principios genéricos y éticos desde los que al frente de *La Mañana del Fin de Semana* he contemplado, enmarcado y presentado todas aquellas informaciones referentes a los movimientos y maniobras de la organización terrorista ETA y aquellas otras sobre el proceso de rendición comandado por Zapatero ante esta banda de asesinos. Ésa ha sido la huella que ha impregnado en los últimos años el trabajo de los programas de referencia de la *Cadena COPE* desde el liderazgo de Federico Jiménez Losantos y de sus Servicios Informativos bajo la dirección de Nacho Villa.

En el marco del proceso de capitulación y debilitamiento del Estado de Derecho frente al terror, el gobierno de la nación ha olvidado que las víctimas son nuestra principal preocupación. No ha entendido que la colaboración de las víctimas y su incardinación en la sociedad española para combatir a los terroristas sigue siendo necesaria. No ha comprendido que no hay nadie mejor que las víctimas para defender los valores de la convivencia y el respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han castigado con destrucción y les han infligido dolor y sufrimiento. No se ha percatado de que la equidistancia y la inacción sólo contribuyen a alimentar el terror y a reforzar la moral de quienes lo ejercen. Ha desdeñado el impulso moral y el coraje cívico de quienes lo sufren.

El gobierno de la nación ha olvidado que es objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas así como con aquellos que apoyan, encubren, justifican o disculpan sus acciones criminales. Ha olvidado que una sociedad que aspire a la libertad y la justicia no puede admitir explícita ni implícitamente, bajo ninguna circunstancia, que una organización terrorista se convierta en representante legítima de un sector de la ciuda-

PRESENTACIÓN: LA HORA DE RESISTIR

danía ni tampoco puede tenerla como interlocutor político, situándola en un plano de igualdad y otorgando respetabilidad a sus dirigentes, delegados o emisarios. Ha olvidado que el único conflicto que sufre la sociedad vasca es el que deriva unilateralmente de aquellos que no creen en la convivencia y que ejercen el terrorismo para imponerse a la mayoría.

Zapatero ha sido incapaz de comprender que, en democracia, no es posible el pacto sino la represión de aquellos que vulneran sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales promoviendo, justificando o exculpando los atentados; no es posible el pacto con quienes fomentan, propician o legitiman la violencia; no con quienes complementan y apoyan políticamente la acción de ETA para conseguir sus fines de subvertir el orden constitucional y someter, bajo los efectos demoledores y perversos del terror, a los poderes públicos y a la sociedad; no con quienes aíslan, intimidan y persiguen a las víctimas del terrorismo colocándolas bajo la losa de la coacción, la marginación y la exclusión; no con quienes dan cobertura, recompensan, rinden tributo y homenajean a quienes manejan la disyuntiva del coche bomba o el tiro en la nuca; no es posible el pacto sino la ofensiva irrestricta, en definitiva, contra quienes trabajan activamente para vulnerar los principios democráticos deteriorando, erosionando y aspirando firmemente a liquidar el régimen de libertades en España.

El gobierno de la nación ha buscado la negociación y el pacto con una organización terrorista como ETA para que deje de cometer atentados. Ha buscado la rendición del Estado de Derecho sin entender, por pura ignorancia, que como le contestó Winston Churchill a Neville Chamberlain en los albores de la II Guerra Mundial después de la firma con Hitler de los pactos de Múnich, «un pacto con la maquinaria de terror nazi no puede ser una paz con honor». Así era y así sigue siendo. Cuan-

¿RENDIRSE ANTE ETA?: 25 VOCES POR LA RESISTENCIA

do uno pacta con la maquinaria de terror etarra «pierde el honor y no gana la paz». Tras ser vapuleado en un primer momento por la opinión pública británica por su sombrío diagnóstico, Churchill tuvo que ser llamado para presidir un gobierno de salvación nacional para restaurar la dignidad británica y hacerla prevalecer frente al totalitarismo. Zapatero ha perdido su honor pero su cobardía ha provocado la creación y sostenimiento de una imparable oleada de resistencia cívica cuyo objetivo ha sido la lucha por la libertad, sin complejos y sin tregua, desde la defensa del honor y la historia de la nación española.

Este libro ha sido alumbrado desde una convicción intelectual y moral categórica que no ha sido sino reforzada por la conversación con quienes ilustran estas páginas. Creo en la fuerza de la libertad y creo en la represión de los enemigos de la libertad. Sólo quienes abrigamos estos principios seremos capaces de acabar dignamente con el terror.

*Madrid - Dehesa de Campoamor,
septiembre de 2007*

Razones políticas, legales y morales para rechazar la claudicación de Zapatero ante ETA

La bancarrota moral de Zapatero o cómo convertirse en la vergüenza del socialismo

«Si yo fuera creyente afirmarí­a que si Jesucristo estuviera entre nosotros echarí­a del templo y a patadas a tanta “buena gente”. Como a los fariseos. Pero como no parece que eso vaya a ocurrir nos toca a nosotros quitarles la careta. Y señalarles y mirarlos con todo el desprecio que se merecen los cobardes que comercian con el dolor.»

La socialista Rosa Díez ha sido el testimonio vivo de una realidad. La capitulación ante una banda de terroristas no es un proyecto partidista del PSOE, no es un proyecto que se entienda desde la posición de socialistas históricos, no es un proyecto ideológico que represente una acción conjunta y en bloque de la izquierda política y social. Se trata de un proyecto personal de Zapatero incardinado en un plan de gobierno contrarrevolucionario e inconstitucional en sus vectores principales.

Ese proyecto ha sido jaleado por la «buena gente»; por aquellos que desde la izquierda han tildado de radicales y de peligrosos elementos de la extrema derecha a quienes han mantenido la firmeza frente al terror; por aquellos que han asegurado rayando la calumnia que los que piden la derrota de ETA parecen estar deseando que los terroristas maten y maten; por aquellos que han bendecido el diálogo con una banda de asesinos criminalizando a los que se oponen a esa forma indigna de cesión; por aquellos que entienden que se puede sellar la paz con terroristas

como Otegi, Ternera o De Juana al otro lado de la mesa pero que no se puede alcanzar un acuerdo con los «guerracivilistas» que se oponen a que se converse con encapuchados; ese proyecto alumbrado por Zapatero ha sido respaldado, en definitiva, por aquellos que han arrinconado y marginado a los socialistas que han denunciado una apuesta infame por la ignominia y la rendición.

Quienes desde el socialismo han intentado defender la fortaleza democrática y la decencia cívica frente al terror han sido expulsados, silenciados y sometidos. Y lo han sido por oponerse a que se entregue a los pistoleros lo que pidan, incluida la autodeterminación, a cambio de que dejen de matar; por sostener que, para que acaben los asesinatos, no se puede entregar aquello por lo que se han pegado tiros en la nuca y se han colocado coches bomba durante cuarenta años.

Han sido purgados en las filas del PSOE quienes se han mantenido erguidos ante el terror. Por el contrario, han sido elevados y promocionados por la dirección del partido aquellos que se han ablandado por el estruendo de las bombas y se han dejado seducir por los camelos de la negociación; aquellos que hoy se encuentran en la antesala de la claudicación aunque históricamente han defendido, por ejemplo, que «ofreciendo diálogo a ETA se da una cierta legitimación a la banda»; que «hay que acabar con ETA por la vía policial, sin ventanillas ni diálogos»; que «hay que aguantar el tirón sin negociar»; que «Batasuna tiene que sufrir las consecuencias de su coexistencia con el terrorismo no sólo en el orden electoral sino por medio del aislamiento social»; que «ETA debe saber que puede herir a una parte de la sociedad causando tragedias humanas, pero que una sociedad sana no se puede construir sobre la base de la cesión al chantaje terrorista sino sobre la resistencia»; que «no es posible dialogar cuando seguimos teniendo el riesgo de que nos asesi-

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

nen»; que «no es aceptable que ETA supervise el proceso hasta el punto de que si el resultado no es de su agrado, se reanuden a continuación las actividades armadas»; que «vencer la batalla es un reto esencial en la historia de España»; que «nadie puede ser interlocutor con el PSOE si no condena la violencia, la extorsión y no acepta las reglas del juego democrático», como aseguró en su día desde su pequeñez intelectual Pepín Blanco; que, como llegó a asegurar Felipe González, «es un error dramático alimentar la expectativa de un pacto político con un grupo de asesinos, porque eso únicamente fomentaría el nacimiento de otros grupos de asesinos».

Zapatero, como el imán que se convierte al islamismo yihadista y busca inmediatamente nuevos adeptos y reclutas para su causa, ha capitaneado y exigido a su partido que complete un proceso de «radicalización» y «conversión». Ha reclamado del primero al último de los militantes socialistas que asuman como propios algunos de los objetivos defendidos desde el otro lado de la mesa por nacionalistas y terroristas. Ha sido incapaz de comprender que la negociación, entendida como un espacio para la búsqueda de acuerdos sustentados en la razón y el convencimiento, carece de todo sentido cuando una de las partes sujeta con la mano derecha un argumento pretendidamente político y empuña con la mano izquierda una pistola.

Oxigenando a una ETA moribunda o cómo conseguir que la bestia deje de estar fatigada

A finales de 2003, la multiplicación de detenciones policiales en España y Francia corroboraba la idea de que la organización terrorista ETA había entrado en su ciclo final ante un panorama de progresivo debilitamiento interno. Por una parte sufrió las conse-

cuencias de la «guerra política» que dio como resultado la ilegalización de los criminales de Batasuna y su expulsión de la vida pública; por otra, y tras la ruptura de la tregua trampa 1998-1999, vio las detenciones encadenadas de los máximos responsables de su aparato armado que se fueron relevando los unos a los otros de forma vertiginosa: García Gaztelu «Chapote», Olarra Guridi «Jon», Ainhoa Múgica «Olga», Ibón Fernández «Súsper», Gorka Palacios «Nagi» y Juan Luis Rubenach «Churdo».

Las detenciones a un ritmo endiablado y enormemente efectivo de cuadros altos del entramado habían obligado a ETA a reemplazar a sus jefes con elementos de escasa preparación que propiciaban, a su vez, nuevas y rápidas caídas e imposibilitaban que las recién creadas estructuras se asentasen suficientemente y con garantías para hacer avanzar los intereses de los encapuchados. La organización tenía un serio problema de reclutamiento en la medida en que la acelerada selección y estructuración de jóvenes radicales sin pasar rigurosos controles no permitía descartar las infiltraciones policiales, muchas y muy eficaces.

Tanto en el plano operativo como moral, ETA estaba a pocos tramos de alcanzar su fase terminal. Hasta tal punto llegaba la asfixia que en el verano de 2004, históricos como Iñaki Bilbao Beaskochea «Iñaki de Lemona», Karlos Almorza Arrieta «Pedrito de Andoain», Francisco Múgica Garmendia «Pakito» o Iñaki Arakama Mendi «Makario» pedían el cese del terrorismo por su inoperancia. Admitían que la estrategia de la organización había sido superada por la represión policial y judicial, confesaban que nunca ETA había atravesado y alcanzado un momento tan crítico y adverso para sus intereses, reconocían que su capacidad de influir estaba mermada y no existía suficiente fuerza de reacción, y señalaban que su poder de disuasión a través del ejercicio de las amenazas y del uso de la violencia era nulo.

Con el tiempo, la organización terrorista ETA no sólo ha re-

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

nunciado a abandonar la violencia de forma gratuita sino que ha entendido que, con Zapatero en La Moncloa, se daban las condiciones oportunas y seguramente irrepetibles para arrancar contraprestaciones en una mesa de negociaciones a cambio del cese de la actividad armada.

Superado el rubicón de marzo de 2004, y asimilada una victoria electoral impulsada bajo el estruendo de las bombas y de la instrumentalización política y social del dolor de Atocha, Zapatero, el PSOE y sus potentes aunque hoy decadentes terminales mediáticas comenzaron a trasladar e inocular a la opinión pública, de forma más o menos clara, de forma más o menos sibilina, que el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo estaba superado debido a que la irrupción de la amenaza yihadista materializada el 11M hacía necesario conformar un nuevo consenso que incluyera a nacionalistas vascos y catalanes. Se pretendía así abrir la puerta no a quienes habían abogado por la derrota del terrorismo desde los frentes político, policial y judicial sino a quienes, como el PNV y Esquerra Republicana, habían pactado con los asesinos y su entorno sin ningún complejo, los primeros en Estella y los segundos en Perpiñán sin ningún tipo de miramientos.

En adelante, y en no pocas ocasiones, el PSOE se negaría a convocar el pacto, rompiendo de forma flagrante el compromiso adquirido solemnemente por Zapatero de reunirlo siempre que una de las dos partes lo solicitara. Carecía de sentido para el presidente del gobierno, en consecuencia, respetar los criterios morales y políticos fijados en ese documento. No procedía ya denunciar a quienes colaboraban indirectamente en el negocio del terror y a quienes podían tener la tentación de reconocer a una organización terrorista como representante legítimo de un sector de la población y, en consecuencia, como interlocutor político válido.

La posición personal de Zapatero en relación a la candidatura proetarra del Partido Comunista de las Tierras Vascas, en la primavera de 2005, supuso toda una declaración de intenciones sobre el siniestro y oscuro trasfondo de sus planes con ETA. De un plumazo, en una actitud calculadora y cobarde, y con la complacencia del fiscal general del Estado, se resucitó la justificación y el apoyo al terrorismo en la Cámara de Vitoria, se les oxigenó la moral a los criminales, se les dio parcialmente carta de legalidad, se les ofreció dinero fresco para engrosar sus cuentas corrientes y se les abrió de par en par la puerta a las instituciones en una muestra insólita de renuncia y claudicación ante el terror en toda su extensión.

Las fuerzas de seguridad del Estado no albergaban ninguna duda del funcionamiento del PCTV como entidad sucesora operativamente de la organización terrorista Batasuna por una serie de razones perfectamente probadas y trazadas en un informe sellado por la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil el 10 de abril de 2005.

En primer lugar, ETA había expresado de forma reiterada en sus documentos internos la necesidad de que Batasuna concu- rriera a las elecciones autonómicas vascas con el doble objetivo de aglutinar a la masa social de referencia y mantener el principal instrumento de «lucha institucional». En segundo lugar, el hecho de que el PCTV no protagonizara una escisión ruidosa y pública distanciándose paulatinamente de Batasuna, unido a su comunión incondicional con el ideario proetarra, favorecieron de forma determinante que la ilegalizada Batasuna se sintiese cómoda, de forma sobrevenida, con la representación inter- puesta del propio PCTV. En tercer lugar, el PCTV funcionaba como pantalla legal de Batasuna e, incardinado en el seno de la izquierda ideológica, presentaba una clara vocación según su propia definición de colaborar de forma permanente con las or-

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

ganizaciones que perseguían los objetivos comunes y genéricos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En cuarto lugar, y como conclusión general y definitiva de la evaluación y la interpretación conjunta de todos los elementos disponibles, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado inferían que se había producido una absorción de facto del PCTV por parte de la organización terrorista Batasuna-ETA, en el doble ámbito de la reivindicación y objetivos políticos y en el ámbito orgánico estructural.

Decenas de pruebas ignoradas por el gobierno y la Fiscalía General del Estado anunciaban sencillamente y ya en 2005 que, independientemente de la naturaleza de las evidencias acumuladas por las fuerzas de seguridad y por los tribunales contra ETA y su entorno, siempre que existiese esa posibilidad, el gobierno iba a optar por una estrategia de permisividad, tolerancia e incluso impunidad hacia este *holding* criminal. En modo alguno iba a reclamar que se acabase con el agravio constante que supone la colaboración de las instituciones públicas que representan al conjunto de los ciudadanos con quienes sustentan y alientan el fascismo etarra, por la sencilla razón de que esa condescendencia no supone sino un incremento constante de la coacción, el miedo y la muerte.

Zapatero ha rebajado paso a paso, pago a pago, todos los niveles de exigencia democrática a los terroristas. Su diálogo y la concesión del rango de interlocutor legítimo a ETA-Batasuna no ha sido correspondido por un proceso paralelo de desarme de la banda ni por un anuncio creíble de abandono definitivo e incondicional de las armas. La negociación ha favorecido no sólo la perpetuación de este entramado criminal sino su fortalecimiento.

El terrorismo etarra ha obtenido réditos políticos al aceptarse el diálogo bajo la presión de la violencia, de la extorsión a em-

¿RENDIRSE ANTE ETA?: 25 VOCES POR LA RESISTENCIA

presarios, de atentados de oportunidad y asesinatos selectivos como el de Barajas y bajo la constante del terrorismo callejero: los chicos de la gasolina han arrasado mobiliario urbano, han destrozado vehículos de particulares, le han prendido fuego a cajeros de entidades bancarias, han incendiado empresas privadas y hasta han intentado quemar vivos en plena calle a dos agentes del orden después de rociarles con combustible y disolvente, emulando un método de actuación similar a los aplicados por los esbirros del terror en la Alemania nazi.

El gobierno ha menoscabado la función capital del terrorismo callejero como primera etapa para escalar en el organigrama piramidal de la banda asesina. Y lo ha hecho al desprestigiar un elemento capital en la estrategia de los pistoleros para alcanzar el objetivo de «socialización del sufrimiento». Ha ocultado a los españoles que los jefes de logística de ETA y sus principales pistoleros de los últimos años son fruto de los esfuerzos del entramado juvenil etarra. Desde «Cheroki» hasta «Chapote», desde «Súspere» hasta el mismo hijo del criminal «Josu Ternera», desde Iranchu Gallastegui a Jon Salaberría pasando por Mikel Zubimendi. Eran y son terroristas. Ni eran vándalos cuando ponían bombas en la calle ni lo eran cuando, pasado el tiempo, descerrajaban tiros en la nuca. Eran y son terroristas.

Como se ha señalado desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo, quienes han apoyado ciegamente un proceso de negociación con una organización terrorista, después de cuatro décadas y casi un millar de muertos, no han entendido que: 1) la única forma legal y legítima en democracia de acabar con el terrorismo es su derrota, 2) bajo ningún concepto los terroristas pueden convertirse en interlocutores sociales y obtener réditos mediante el miedo que infunden en la sociedad a través del uso sistemático de la violencia, 3) no se puede edificar la paz sobre el vacío histórico y la desmemoria, 4) las víctimas, su voz, su memo-

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

ria, su dignidad y su petición de justicia no pueden ser moneda de cambio para primar a los asesinos y a su entorno político, 5) de ninguna manera pueden ganar los que han transmitido y fomentado la cultura del odio y la falta de respeto al ser humano, 6) la voz de los criminales no puede ser situada por encima ni siquiera al mismo plano de la voz de los que han sufrido su terror, y 7) todo gobierno que se precie de democrático debe rechazar la impunidad política y no favorecer la social o la judicial. El sector social y político que defiende la negociación no ha entendido que sólo se acaba dignamente con una banda de asesinos si completado el proceso que lleva al final de la violencia se puede distinguir claramente la presencia de vencedores y vencidos.

En efecto, la negociación política con terroristas lleva implícita en sí misma una estrategia de desistimiento del Estado de Derecho, el reconocimiento de que ni se quiere ni se puede alcanzar la derrota definitiva de una banda de asesinos por la vía policial y judicial y, lo que es más grave, lleva implícita en el caso de ETA la justificación histórica de sus cuatro décadas de actividad criminal. El mensaje que se traslada a todas las instituciones, al conjunto de la sociedad civil y al propio enemigo cuando se apuesta decidida y unilateralmente por esta vía para lograr la desaparición de la violencia es nítido: el terrorismo funciona; el tiro en la nuca y el coche bomba son instrumentos a través de los que, con el paso del tiempo y con determinados gobiernos en el poder, se puede dar satisfacción a intereses pseudopolíticos totalitarios y racistas.

El hostigamiento a las víctimas o cómo desarmar moralmente los contrafuertes de la sociedad española

El camino de traición del PSOE de Zapatero y de sus correligionarios de partido en el País Vasco arrancó antes de la victo-

ria electoral sobrevenida y contra todo pronóstico tras el 11M. El sigilo y la nocturnidad de los encuentros entre los socialistas Jesús Eguiguren y Francisco Egea, por un lado, y Arnaldo Otegi y Pernando Barrena, por el otro, fueron extremos. Hasta tal punto que los servicios de información durante la segunda legislatura de José María Aznar en La Moncloa no los detectaron, con lo que ello habría supuesto: la constatación de que los socialistas dialogaban con una organización terrorista castigada por una presión judicial pero que persistía en su actividad criminal y extendía su reguero de atentados. No sorprende que la misma noche del 14 de marzo de 2004, con 192 cadáveres y más de 1.800 heridos y mutilados, y con la huella etarra o yihadista de la matanza de Atocha por dilucidar, Eguiguren y Otegi hablasen por teléfono para comentar el alcance político de la victoria del PSOE. Los terroristas estaban ante su gran ocasión.

La negociación, impulsada definitivamente tras la llegada de Zapatero a La Moncloa ha llevado a un preocupante sector de la izquierda a comprender las supuestas justificaciones de los etarras para el ejercicio de la violencia ayudando en consecuencia a la supervivencia y fortalecimiento de una ideología, una propaganda y una retórica abyectas. Las maniobras del gobierno dirigidas al acercamiento y el pactismo con los terroristas han ido acompañadas de otras estrategias paralelas para el debilitamiento y el desgaste de aquellos sectores políticos y sociales que se han opuesto a una negociación política con asesinos, incluidas las víctimas del terrorismo.

Por primera vez en la historia de la democracia, el presidente del gobierno de la nación no sólo ha hecho dejación de funciones en el capítulo de los imperativos legales pilotando la respuesta política, jurídica y policial al terror; ha hecho dejación de funciones en el capítulo de imperativos morales, renunciando a impulsar una respuesta cívica a los criminales.

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

El nombramiento sin consenso y de espuria intencionalidad política de Gregorio Peces Barba al frente del Alto Comisionado de las Víctimas del Terrorismo fue uno de los ejes de esa estrategia. Jamás se había distinguido Peces por su vinculación al mundo de las víctimas ni por su marcado y especial compromiso con ellas. Tras asumir el cargo, concentrado en la misión de dividir, debilitar y desactivar la referencia moral de las víctimas, asumiendo la estrategia gubernamental de la negociación, llegó a justificar su ausencia en distintas manifestaciones de la AVT pretextando que buscaban básicamente atacar al gobierno y argumentando que sólo se sumaría a una marcha de esas características cuando hubiera atentados mortales, sin aclarar si también lo haría en el caso de que una bomba etarra dejase a personas mutiladas o heridas, como lo ha hecho en numerosas ocasiones después de la llegada de Zapatero a La Moncloa. Menoscabó y humilló no sólo a quienes habían sido castigados físicamente por el terrorismo callejero sino a quienes seguían siendo víctimas de las amenazas y la extorsión después de la llegada del PSOE al poder. Peces no se enteró jamás de que ETA, como ha recordado Teresa Jiménez Becerril, es una maquinaria criminal que «dialoga y mata, habla y mata, se manifiesta y mata, escribe y mata».

La miseria moral que exhibió Peces en el ejercicio de su responsabilidad no fue fruto de la casualidad. Zapatero cambió desde el inicio de la legislatura el reconocimiento y la referencia de las víctimas por la búsqueda de su marginación y su desprestigio. Ha renunciado a defender su unidad para trabajar activamente provocando su distanciamiento y división interna. Ha relegado a la trastienda su ejemplo activo en la lucha contra el terrorismo para pasar a considerarlas un obstáculo en el camino para acabar con la serpiente etarra. Ha renunciado a promover con energía su reparación a través de la justicia para pasar a dis-

pensar un trato de guante blanco hacia los verdugos mediante la acción del Ministerio Público. Ha intentado mermar y, en ocasiones, secar los fondos económicos que legal y moralmente pertenecen a las víctimas, sin pestañear cuando sus aliados de gobierno nacionalistas mantenían y vigorizaban los caudales que han ido llegando a las familias de los etarras y a quienes disculpan y justifican sus horribles crímenes.

El presidente del gobierno ha completado su legislatura buscando y provocando el enfrentamiento, el enfado y el dolor de los asesinados por ETA olvidando que los españoles piden sencillamente respeto, reconocimiento y justicia. Ésa, ni más ni menos, es toda su exigencia, lo que venían reclamando con toda discreción y con toda prudencia cuando el poder político les respondía, les acompañaba y protegía, cuando el poder político no les abandonaba ni les generaba incertidumbre y preocupación. El resultado de esta acción de gobierno es que los colegas de asesinos como «Chapote» o Iñaki de Juana, al que se ha presentado como una destacada figura en el proceso de paz dispuesto a hacer esfuerzos para solucionar el conflicto, han sentido el amparo de Zapatero. La familia de Miguel Ángel Blanco y los hijos de Alberto Jiménez Becerril y Ascen han sentido el abandono. Matones como Cándido Aspiazu se han sentido reconfortados; luchadoras por la libertad como Pilar Elías, traicionadas.

Lo normal en una democracia fuerte es que la compasión, la comprensión, la piedad y el apoyo moral se reserve para Mari Mar Blanco, para Teresa Jiménez Becerril, para Francisco José Alcaraz y así hasta para el último de los españoles que ha visto cómo el zarpazo del terror le ha arrebatado lo que más quería. Lo normal, salvo en una nación enferma, es que la compasión y la piedad no se reserve para *Chapotes*, para *Troitiños* y para *De Juanas*; que no se reserve para los que se han echado a las espal-

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

das 15, 20 o 25 asesinatos; repugna a la moral pública y a la moral individual que haya un gobierno de la nación que pida piedad para algunos de estos sujetos.

Frente a la incompreensión, incluso frente a la ira del gobierno, las víctimas han tomado las calles de España para decir alto y claro que ninguna democracia quiere a un presidente del gobierno que lo apueste todo a una carta con los terroristas, que convierta su negociación con asesinos en el proyecto estrella de una legislatura, que le dé esperanzas y un horizonte de futuro prometedor a un grupo criminal, haga lo que haga y pase lo que pase. Y lo han hecho a pesar de que no pocos descerebrados las han tachado de falsarias y acusado de actuar sencillamente como marionetas al dictado del único partido de la oposición.

Las víctimas han percibido que, a pesar de que su gobierno les ha fallado, las ha traicionado y las ha despreciado, los españoles no han escatimado en su apoyo y su calor. Atrás han quedado las concentraciones de silencio y de resignación. El proceso de negociación ha tenido su paralelo en una rebelión cívica que, como dejó grabado el Foro de Ermua en su declaración de principios fundacional, ha actuado como «un relumbrante faro que ha iluminado en la larga noche del terrorismo vasco y en las nieblas de su rentabilización política».

Coyunturalmente, y en momentos críticos como el doble asesinato de Barajas, las víctimas se han visto obligadas, arropadas por la mayoría absoluta de los españoles, a decirle al gobierno que nadie quiere a un presidente que sencillamente se separe durante un tiempo de los terroristas, que se levante de la mesa a dar un paseo y a tomar un poco de oxígeno: los españoles quieren a un poder político que, sin complejos y sin tregua, trabaje para la persecución, el procesamiento y la represión penal de los terroristas con el escudo del Estado de Derecho. A los golpeados por ETA se les ha llamado al silencio, se les ha estigmatizado y se

les ha arrebatado su espacio y su ejemplo en la democracia por negarse a cerrar filas, a actuar como cómplices, colaboradores y testigos mudos en los acuerdos establecidos con la banda de asesinos que les había arrebatado a sus seres más queridos.

La labor sistemática y esforzada de agresión a quienes han salido a las calles de España, a los que se ha acusado por parte del gobierno de ser gente radical, vociferante y que va de mala fe, contrasta con el trato que se ha dispensado a las plataformas criminales que han decidido echarse al monte. No ha bastado con identificar a los convocantes de un sinnúmero de manifestaciones como miembros de entramados terroristas; no ha bastado con la presencia de carteles, logos y distintivos de la organización criminal Batasuna convocando las marchas; no ha bastado con la llamada y la convocatoria de los líderes de este entramado; tampoco con que los dirigentes terroristas se hayan dejado ver en las marchas promoviendo mensajes amenazantes contra quienes han sufrido el látigo del terror.

Los actos proetarras de justificación, apología y exaltación del terrorismo han sido observados de forma absolutamente contemplativa por un gobierno silente y cruzado de brazos a pesar de que en todos ellos se han lanzado dos mensajes nítidos: ni los verdugos en prisión quieren la paz sin precio político, ni los criminales que disfrutaban de libertad van a abandonar su campaña de amenazas, coacción, justificación y enaltecimiento del terrorismo.

Zapatero no ha comprendido que al terrorismo se le puede vencer y que las instituciones democráticas tienen la obligación de movilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para conseguir esa derrota. Doblegar al terrorismo requiere combatir la impunidad y deslegitimar de forma radical y absoluta el discurso y las acciones de los terroristas; requiere estar convencidos de la supremacía moral de la democracia; requiere estar firme-

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

mente comprometidos en que la democracia nunca se declare en tregua ni se acompleje ante el chantaje, las amenazas y la coacción; requiere arrebatar el espacio público no sólo a quienes amparan y justifican el terror sino a quienes se acobardan, se amilanan y vacilan ante los enemigos de la libertad. En reiteradas ocasiones ha dicho Zapatero que «lo importante es que ETA tenga un final». Es la forma más rotunda de verbalizar una estrategia de pura desertión y de puro desistimiento. Lo que los españoles esperan escuchar de su presidente es: «lo importante es que ETA sea derrotada».

**La apuesta ciega por un proyecto contrarrevolucionario
y anticonstitucional o cómo congraciarse con los enemigos
de España y de la libertad**

El presidente del gobierno se ha entregado al nacionalismo y al pacto con todos aquellos actores políticos que cuestionan, se oponen e intentan sistemáticamente violar la Constitución cuestionando sus más elementales preceptos para garantizar y proteger la convivencia entre españoles. Se ha apoyado en socios como Ibarreche y Carod Rovira, en formaciones como Esquerra Republicana y el PNV que tradicionalmente han servido de paraguas ideológico al terror y que en no pocas ocasiones han obtenido rédito político del ruido y el destrozo de las bombas. Y ha acometido este proceso de alianzas asumiendo la necesidad de un nuevo proceso constituyente para el País Vasco y el respeto a un aberrante derecho de autodeterminación: un proceso de transición política, bajo ningún concepto puede levantarse desde la iniciativa lanzada y las condiciones diseñadas por una banda de criminales. Los propios etarras han visto en Zapatero «una intención de poner en marcha un segundo proceso de reforma

del Estado» que traería la «resolución definitiva del conflicto vasco».

Los que han hecho política desde la cordura, la sensatez y la mesura han sido para Zapatero los nacionalistas. La cordura y la sensatez la han puesto por lo visto partidos como el PNV, aquellos que piden medidas de gracia para los asesinos de ETA, los que piden que pare la acción del Estado de Derecho contra la organización terrorista Batasuna, los que piden que se derogue la Ley de Partidos, los que piden que se haga volar por los aires el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, los que piden la clausura de la Audiencia Nacional por considerarla poco menos que un tribunal propio de un régimen dictatorial, los que toleran homenajes y festines por todo lo alto para terroristas de ETA como si se tratase de una original forma de folclore popular.

Dejando a un lado la claridad moral y el más elemental sentido común, su permanente obsesión no ha parecido otra que la de distanciarse del Partido Popular, incluso la de actuar deliberadamente para aislarlo y en no pocas ocasiones para deslegitimarlo. Toda la artillería se ha dirigido contra la oposición en una estrategia espuria a la que han contribuido numerosos y generosamente subvencionados miembros de la farándula española y presuntos intelectuales que importando técnicamente el lenguaje del partido nazi de Hitler y de la dictadura soviética de Stalin, la retórica propia de la propaganda totalitaria de la II Guerra Mundial, han apelado al término «cordón sanitario» para señalar el método a aplicar para hacerle la vida imposible al Partido Popular.

Bajo ningún concepto se ha buscado el aislamiento y la deslegitimación o el ataque a los terroristas de cuello blanco, a los que se ha brindado la ocasión de volver a la esfera pública, de subir desde las alcantarillas hasta las calles de la democracia. Ese proceso de lavado de cara a la organización terrorista Batasuna

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

ha ido acompañado de declaraciones sistemáticas y episódicas en las que el gobierno ha manifestado su intención de hablar hasta las últimas consecuencias con los asesinos.

Ha sido ETA la que ha marcado el terreno de la negociación, la que ha fijado las reglas y repartido camisetas y dorsales a los jugadores. Zapatero ha aceptado el calendario, la agenda, las condiciones y, lo que es repugnante desde un punto de vista democrático, el contenido político al que de ninguna manera ha renunciado la organización terrorista; ha sido ésta la que ha impuesto el lugar, la fecha, el método de trabajo y los mediadores en los contactos que los criminales han mantenido con emisarios del gobierno.

ETA ha controlado los pasos y los ritmos. Los desplantes de los terroristas y el ejercicio permanente de la violencia no han impedido que el gobierno continuase agrandando las expectativas con la patraña de que había dirigentes posibilistas en ETA y Batasuna que amasaban una cuota de poder y de influencia que podía favorecer una salida dialogada hacia la paz. Aprovechando la dejación y la permisividad de la Fiscalía General del Estado, la organización terrorista Batasuna ha actuado como un partido político más. Apelando al cacareado respeto a los derechos individuales de aquellos que trabajan activamente para extender el terror y socavar los cimientos de la democracia, el gobierno ha sido incapaz de inhabilitar y hacer efectiva la suspensión cautelar del brazo político de ETA.

Zapatero ha emprendido la carrera del diálogo sin respetar sus propios condicionamientos previos y amoldándose al guión de la banda. Ha entendido el proceso con una obsesión de entendimiento y cesión. ETA ha forzado la negociación política para lograr el reconocimiento como nación de esa entidad ficticia a la que llama Euskal Herria, que engloba el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y los territorios vasco-franceses.

¿RENDIRSE ANTE ETA?: 25 VOCES POR LA RESISTENCIA

ETA mantiene su rechazo a la Constitución y al Estatuto de Autonomía Vasco, por entender que configuran un marco de negación de los derechos del pueblo vasco, consagran la partición de su territorio y son fruto de una imposición antidemocrática. ETA no ha expresado ningún arrepentimiento por sus crímenes ni la menor voluntad de resarcimiento del daño causado por sus atentados y asesinatos.

El presidente del gobierno ha concedido rango de interlocutor privilegiado a un entramado criminal como Batasuna, sin exigirle una condena de la violencia e importando el lenguaje que repudia la «derrota de ETA» para apostar por la «pacificación» y la «normalización política»: para Zapatero, hay algo de verdad en el discurso particularmente etarra y, por extensión del nacionalismo, según el cual existe un conflicto en el País Vasco que para solucionarse necesita del reconocimiento de que todas las partes, víctimas y verdugos, tienen alguna cuota de responsabilidad.

Zapatero ha entendido que todo pueblo tiene derecho a determinar su propio destino, que todas las naciones tienen derecho a definir su marco jurídico-político en su propio territorio, que la búsqueda de soluciones, a pesar de tener un coste democrático irreversible, es preferible a combatir el terror y soportar los asesinatos como consecuencia de la represión policial del crimen. Ha seguido la receta de Otegi. Desde el primer momento ha asumido la fórmula presentada por el líder terrorista el 14 de noviembre de 2004 en el velódromo de Anoeta: el futuro de ese ente fantasmal llamado Euskal Herria debería construirse desde dos mesas de negociación; una de ellas, de naturaleza técnica, en la que ETA y el gobierno de la nación debatiesen aquellos asuntos que afectaban al futuro estricto de la organización terrorista, como el indulto a los presos o una eventual entrega de las armas; la segunda, de naturaleza política, en la que todos los

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

partidos, incluida la plataforma criminal Batasuna, debatiesen aquellos asuntos que afectaban al futuro estatus del País Vasco, Navarra y el sur de Francia.

La ilegalización de un partido como Batasuna ha sido un acontecimiento incómodo y traumático para el PSOE. Zapatero ha contemplado el conflicto vasco como el espejo en el que se refleja la imposición de España como proyecto negador de los derechos nacionales de pueblos que, como el vasco, han sido maltratados por el Estado. El propio Otegi ha señalado en más de una ocasión que el hecho de que Zapatero haya aceptado «la existencia de naciones diferentes a la española es una revolución política», puesto que jamás un jefe del ejecutivo ha aceptado esos extremos, ni siquiera de forma ambigua.

El gobierno ha sido incapaz de comprender que el combate contra ETA fracasará si se circunscribe a la persecución y el desmantelamiento esporádico de sus grupos de ataque, dejando en la impunidad a quienes conforman la completa estructura criminal que los terroristas han articulado en diversos frentes durante cuarenta años. Zapatero ha desechado la Ley de Partidos por considerarla, al más puro estilo y según la doctrina nacionalista, una legislación de excepción, cuando en realidad se trata de una legislación especializada para combatir la amenaza terrorista como una modalidad sofisticada de criminalidad organizada. Se ha perdido de vista que Batasuna representa básicamente los intereses de una banda de asesinos que se niega a desaparecer y que sólo tiene como objetivo la imposición de unas condiciones inasumibles para la democracia española a cambio de dejar de matar definitivamente.

El ejecutivo no ha dejado claro quiénes deben disfrutar de su derecho a tener voz y voto y quiénes deben seguir siendo apestados que no tengan otro refugio que el de la ilegalidad y la clandestinidad; y no lo ha hecho porque no ha querido ver

que la sociedad civil no quiere una paz tontorrón y bobalicon: exige una paz con dignidad y con justicia en la que los españoles ganen y los asesinos pierdan. Trabajar en la dirección contraria supone considerar que ETA tiene un ápice de legitimidad como instrumento para la liberación del pueblo vasco y que, en consecuencia, tiene cierta coherencia el argumento manejado por los pistoleros según el cual España fundamentalmente, y Francia en menor grado, han invadido política, militar, social, económica y culturalmente un territorio cuyo destino es ser liberado; supone para el Estado asumir la falsificación de la realidad que ha sido uno de los principales arietes históricos del nacionalismo.

El presidente del gobierno ha mantenido desde el inicio de la legislatura los canales de negociación con Batasuna-ETA abiertos con todas las exigencias políticas de los encapuchados vigentes, desde el reconocimiento del derecho de autodeterminación a la absorción de Navarra. No ha dejado de echarle carnaza al tigre albergando la falsa ilusión de que la bestia, llegado un momento, quedaría saciada; ni las metas terroristas han cambiado ni la definición de las vías tradicionales para alcanzarlas. ETA ha buscado la legitimación de su terror por la vía de la instrumentalización de la ansiedad que ha podido cuajar en la sociedad española por la búsqueda de la paz después de cuarenta años de barbarie.

Zapatero se embarcó en el proceso apelando e intentando inducir una repugnante amnesia colectiva, como si ETA no hubiese arrancado la vida a casi un millar de españoles. Se ha intentado plantear un «borrón y cuenta nueva» como si los que han puesto un coche bomba no lo hubieran puesto, como si los que han disparado en la nuca jamás hubieran descerrajado un tiro, como si los que han quemado un banco o pintado una diana de muerte nunca hubieran jugado con fuego o con pintura

RAZONES POLÍTICAS, LEGALES Y MORALES PARA RECHAZAR...

negra y roja para extender su terror. Y el proceso se ha mantenido mientras los encapuchados han reiterado, una y otra vez, en sucesivas entrevistas y comunicados, que con ellos no valen trampas ni artimañas, apaños ni juegos de manos; han reiterado que con ellos sólo se puede hablar desde un punto de partida básico: el gobierno de la nación debe dar por inválido e ilegítimo el marco de la Constitución.

No sólo eso. Han sido episódicas y vergonzantes las declaraciones del líder terrorista de Batasuna, Arnaldo Otegi, confirmando que el PSOE ha estado negociando durante años, que esa negociación ha sido de contenido político, y que el gobierno ha asumido una serie de compromisos nítidos, básicamente cuatro. En primer lugar, el reconocimiento del derecho de autodeterminación, ya que según la propia ETA «las llaves para resolver el conflicto son la territorialidad y el derecho a decidir» y el debate político «hay que abordarlo sin salir de esos parámetros». En segundo lugar, el final de la política de zancadillas a la propia Batasuna. En tercer lugar, el freno a las detenciones: los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil poco menos que se quedarían recluidos en sus comisarías y sus cuarteles dado que, según los etarras, «por supuesto, había un compromiso por ambas partes de que se daría una distensión del Estado». En cuarto lugar, a los presos «se les daría una salida». Sólo la fortaleza democrática de la mayoría absoluta de los españoles, la presión obligada de las víctimas del terrorismo y los mecanismos apartidistas inherentes a la democracia para la represión de los terroristas han hecho imposible la capitulación incondicional y automática de un gobierno apaciguador.